

COMUNICADO DE PRENSA

245 organizaciones de 31 países piden al Fiscal General retirar los cargos contra líderes comunitarios de Santa Marta y ADES

El 16 de febrero, 245 organizaciones internacionales de 31 países entregaron una petición al Fiscal General de la República de El Salvador exigiendo que retire los cargos contra cinco líderes comunitarios de la comunidad Santa Marta y ADES Cabañas, conocidos internacionalmente como “Defensores del Agua”, detenidos el 11 de enero de 2023.

Esta es la segunda carta que organizaciones presentan ante el ministerio público. En febrero del 2023, 250 organizaciones pidieron liberar a los líderes de Santa Marta, el pasado mes de enero 185 académicos y organizaciones internacionales presentaron una misiva con esta misma demanda sin respuesta alguna.

La carta que se presenta hoy reitera denuncias realizadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos de El Salvador, que las detenciones tienen motivación política, ya que buscan criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la oposición comunitaria que por años ha promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo.

La detención de los cinco defensores indica una ofensiva contra la sociedad civil bajo un régimen progresivamente autoritario y una señal de que el gobierno podría intentar reanudar las operaciones de minería de metálica en territorio salvadoreño, como una alternativa para compensar sus políticas económicas fallidas.

Bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador ha adquirido la mayor deuda pública de la región centroamericana con un 83,7% del producto interno bruto, así lo reflejan los datos del Banco Central de Reserva. Además. La CEPAL indicó que se ha registrado el menor crecimiento económico de la región con un 2,1% y el año 2022 cerró con una disminución del -133% en la inversión extranjera directa comparada con el año anterior. Por otra parte, según estas instituciones, la población vivía por debajo del umbral de pobreza en 2022 registro un aumento del 6.24% en comparación con 2021.

La situación podría empeorar este año, ya que el gobierno ha anunciado más de 100 millones de dólares en recortes presupuestarios a servicios sociales, salud y educación.

A raíz del control de las instituciones democráticas que se consolida con las elecciones del 4 de febrero en El Salvador, organizaciones sociales temen que el presidente Nayib Bukele intensifique su campaña de persecución contra grupos que defienden protecciones ambientales críticas, como la prohibición minera, reivindicadas décadas de movilización popular y lucha.

La carta señala la doble moral de la Fiscalía que no ha enjuiciado a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad de Santa Marta, incluidos los asesinatos en la masacre del río Lempa en 1980, donde fueron asesinadas 30 personas y 189 desaparecidos.

Por lo tanto las 245 organizaciones, entre ellas 38 organizaciones comunitarias, movimientos sociales, y ONGs de El Salvador, se suman para exigir que se retiren los cargos contra los cinco líderes comunitarios de Santa Marta.

San Salvador 16 de febrero de 2024